

Santiago, tres de diciembre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483 A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el de nulidad interpuesto para invalidar la que acogió la demanda de despido injustificado y ordenó la restitución de lo descontado por concepto de aporte a la cuenta del seguro de cesantía del trabajador.

Segundo: Que el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido contra la resolución que falle el de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que “respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia”, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, de su artículo 483-A se desprende que esta Corte debe controlar en la admisibilidad, su oportunidad, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del arbitrio en referencia.

Tercero: Que, conforme se indica en el recurso, se proponen dos materias de derecho a uniformar:

1. La correcta interpretación y aplicación del inciso segundo del artículo 161 del Código del Trabajo, en relación a los artículos 2116 y 2132 del Código Civil, respecto de los trabajadores que ejercen un cargo con poder de representación dotados de facultades generales de administración, y que además revisten la calidad de exclusiva confianza.
2. Determinar la correcta interpretación y aplicación de los artículos 13 y 52 de la ley N°19.728 sobre seguro de desempleo.

I. Respecto a la primera materia.

Cuarto: Que, la sentencia impugnada desestimó el arbitrio de nulidad de la demandada, respecto del motivo contemplado en el artículo 478 c) del Código del Trabajo, fundado en que *“...en el específico caso, el demandante ejercía el cargo de administrador de local, pero no estaba dotado de las facultades generales de administración, como tampoco ejercía un cargo de exclusiva confianza – así quedó asentado como hecho en la sentencia de marras- por lo que lo que los presupuestos que requiere la causal en estudio no son concurrentes, por lo que el*



yerro en la calificación jurídica acusado no es efectivo, como tampoco la infracción de ley de los artículos 161 del Código de la materia y de los artículos 2131 y 2132 del Código Civil; concluir lo contrario implica ir en contra del “factum” de la sentencia recurrida, lo que no es plausible dada la causales invocadas y la naturaleza de derecho estricto del recurso que nos ocupa.”

Agregó que “...las facultades generales de administración deben ser leídas bajo un criterio de organización empresarial, lo que implica tener injerencia en la planeación, organización, dirección y control de la empresa, lo que no se da en el caso, conforme el sustrato material establecido en los motivos octavo y noveno de la sentencia de la instancia”.

Quinto: Que, con relación al tema jurídico planteado para ser uniformado, se ofreció a modo de contraste, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción en los autos Rol N°201-2023, en el que se rechazó el recurso de nulidad deducido por el trabajador demandante en contra de la sentencia que desestimó la demanda de despido injustificado, teniendo para ello presente que la forma en que se invocó la causal del artículo 478 c) del Código del Trabajo excede su ámbito de aplicación pues supone aceptar los hechos fijados por el tribunal lo que no ocurre en la especie, desde que cuestiona si el trabajador tenía la calidad de ser un trabajador de exclusiva confianza. Luego, también mediante un pronunciamiento formal, desestimó la causal del artículo 477 del mismo código, señalando que el recurrente no ha aceptado los hechos establecidos por la judicatura de la instancia, a saber, que tenía a su cargo toda su gestión administrativa, presupuestaria y comercial del local que administraba.

Sexto: Que, como se señaló, para dar curso al recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada.

Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regla la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Séptimo: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito, tal exigencia no aparece observada aquí, desde que la situación resuelta en esta causa no es equiparable con la que sustenta el fallo de contraste, puesto que, como se advierte de su sola lectura, la decisión que ahora se impugna razonó



sobre la base de que el cargo del actor no estaba dotado de las facultades generales de administración, como tampoco ejercía un cargo de exclusiva confianza; a diferencia de lo resuelto en la sentencia acompañada en la que se desestimó el recurso de nulidad fundado en la improcedencia de modificar los hechos establecidos en la instancia.

Octavo: Que, por lo anteriormente expuesto, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto, puesto que la necesidad de uniformidad de la materia y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

II. Respetto a la segunda materia:

Noveno: Que para justificar la existencia de distintas interpretaciones respecto de la materia que se pide unificar, la recurrente alega que la sentencia que impugna decidió que el descuento efectuado por el empleador de los montos enterados por concepto de seguro de cesantía, solo se justifica cuando se configuran los presupuestos del artículo 161 del Código del Trabajo, de manera que cuando se declara que el despido es improcedente, no es posible que se autorice al empleador a imputar a la indemnización por años de servicio lo aportado por dicho concepto.

Lo que resulta contradictorio con lo resuelto por esta Corte en los antecedentes N°93.050-2021, que expresa una tesis jurídica diversa, consistente en que procede el aludido descuento aun cuando se haya declarado injustificado el despido, en atención a que la sanción para el empleador es el aumento del 30% en la indemnización por años de servicios, lo que conduce a emitir un pronunciamiento al respecto.

Décimo: Que la sentencia reseñada en el considerando precedente da cuenta que, en algún momento existieron distintas interpretaciones respecto de la materia indicada, la que se encuentra unificada desde hace algún tiempo por esta Corte, a partir de la sentencia dictada en la causa Rol N°92.645-2021 y, más recientemente, en la N°1.633-2022, de 13 de enero de 2023, y N°80.864-2022, de 17 de mayo de 2023, sosteniéndose sin variación que una condición sine qua non para que opere el descuento de que se trata, es que el contrato de trabajo haya terminado efectivamente por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, lo que se ve corroborado por su artículo 168, letra a), de manera que si la sentencia declara injustificado el despido priva de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728, pues tanto la indemnización por años de servicio como la imputación de la parte del saldo de la cuenta individual



por cesantía, constituyen un efecto que emana de la exoneración prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo.

En consecuencia, si el término del contrato, efectuado mediante la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, fue considerado injustificado por el tribunal, simplemente no se satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N°19.728.

De esta manera no aparece que el tema cuya línea jurisprudencial se procura unificar requiera de la aplicación del mecanismo unificador que importa el arbitrio intentado, por lo que será desestimado en esta etapa procesal.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, se declara **inadmisible** el recurso de unificación deducido contra la sentencia de dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

La ministra **señora Chevesich**, previene, en relación a la segunda materia de derecho, que si bien tienen una postura diferente, en los términos señalados en los votos estampados en sentencias dictadas en causas que se refieren a la misma cuestión, declinan incorporarla, teniendo únicamente en consideración que ya se encuentra uniformada por esta Corte en los términos señalados en la sentencia impugnada, sin que se hayan dado a conocer nuevos argumentos que autorice su variación, tampoco que ha sido modificada.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°54.232-24.





Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Gloria Chevesich R., Jessica De Lourdes González T., Los Ministros (As) Suplentes Juan Manuel Muñoz P., Maria Loreto Gutierrez A. y Abogada Integrante Fabiola Esther Lathrop G. Santiago, tres de diciembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a tres de diciembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

